



**GRADO EN DERECHO
FACULTAD DE DERECHO – SEDE ALGECIRAS
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
TRABAJO DE FIN DE GRADO
CURSO 2018/2019**

**LA CONTROVERSIA DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS AGUAS ADYACENTES A
GIBRALTAR**

Alumno:

**ADRIÁN PIÑERO JIMÉNEZ
adrian.pinerjimenez@alum.uca.es
664658518**

Profesor tutor:

**JESÚS VERDÚ BAEZA
jesus.verdu@uca.es**

ÍNDICE

1.- RESUMEN / ABSTRACT.....	3
2.- INTRODUCCIÓN.....	4
3.- METODOLOGÍA.....	7
4.- REFERENCIAS HISTÓRICAS RELEVANTES.....	8
5.- EL ARTÍCULO X DEL TRATADO DE UTRECHT DE 1713.....	13
6.- POSICIÓN ESPAÑOLA EN LA INTERPRETACIÓN DEL TRATADO DE UTRECHT: TEORÍA DE LA COSTA SECA.....	19
7.- POSICIÓN BRITÁNICA: THE BRITISH GIBRALTAR TERRITORIAL WATERS.....	26
8.- EL DERECHO DEL MAR Y SU DESARROLLO: APLICACIÓN EN LA CONTROVERSIA DE LAS AGUAS GIBRALTAREÑAS.....	29
9.- EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DEL MAR: ¿AFECTA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS GIBRALTAREÑAS?.....	34
10.- CONCLUSIONES FINALES.....	40
11.- BIBLIOGRAFÍA.....	42

RESUMEN

El estatuto jurídico de Gibraltar ha generado una serie de controversias entre España y Reino Unido desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Entre estas controversias, destacamos la relativa a la titularidad de las aguas adyacentes a la Roca. Actualmente, España niega que se cedieran junto a la parte terrestre de Gibraltar, basándose en la llamada "teoría de la costa seca", mediante la cual se afirma que la cesión abarca solo los elementos territoriales recogidos en el artículo X del citado tratado. Esta doctrina es contraria al principio general de Derecho Internacional "la tierra domina el mar", el cual adjudica la soberanía de las aguas adyacentes al Estado ribereño. Este principio se consolida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y es el argumento que Reino Unido emplea para ejercer la soberanía de las aguas gibraltareñas. Además, se debe tener en cuenta la aplicación del derecho de autodeterminación sobre Gibraltar, ya que este puede afectar al Derecho del Mar. ¿Tienen Gibraltar o Reino Unido derechos soberanos sobre el espacio marítimo que controlan *de facto*?

PALABRAS CLAVE: Gibraltar, Tratado de Utrecht, teoría de la costa seca, Derecho del Mar, derecho de autodeterminación.

ABSTRACT

The legal status of Gibraltar has generated a series of disputes between Spain and the United Kingdom since the signature of the Utrecht Treaty in 1713. Among these controversies, we highlight the relative to the ownership of the adjacent waters to the Rock. Currently, the Spanish denial that they were transferred along with the land part of Gibraltar is based on the so-called "theory of the dry coast", that it states the assignment covers only the recognized territorial elements in Article X of the aforementioned treaty. This doctrine is contrary to the general principle of International Law "the land commands the sea", which allocates the sovereignty of the adjacent waters to the coastal State. This principle is consolidated in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 and it is the argument that the United Kingdom uses to maintain the sovereignty of the Gibraltarian waters. Furthermore, the application of the right of self-determination over Gibraltar must be taken into account, since this may affect the Law of the Sea. Do Gibraltar or the United Kingdom have sovereign rights over the maritime space they control?

KEYWORDS: Gibraltar, Utrecht Treaty, Theory of the Dry Coast, Law of the Sea, Self-determination.

2. INTRODUCCIÓN

Las aguas que rodean el territorio gibraltareño han sido objeto de un conflicto que dura, hoy día, más de 300 años desde la firma del Tratado de Utrecht el 13 de julio de 1713. Mediante este tratado, España cedió Gibraltar a Reino Unido, quedando este último como titular soberano del territorio, si bien, ambos Estados discuten sobre la cesión de las aguas adyacentes al mismo. Es una cuestión que no tiene una respuesta clara en la actualidad. Mediante el análisis de la doctrina jurídico-científica especializada, las normas de derecho internacional controvertidas en este caso, así como la jurisprudencia de tribunales internacionales y hechos históricos relevantes de los que los Estados reclamantes son protagonistas, pretendemos dar una visión jurídica, tanto global como precisa, de este conflicto que es propio del Campo de Gibraltar. Además, intentaremos dar una solución a la controversia teniendo en cuenta mi formación básica como alumno de Grado en Derecho.

Para ello, debemos partir de la fuente jurídica principal en este asunto, que no es otra que el citado Tratado de Utrecht. La cesión es regulada por su artículo X¹, y del mismo

1 El texto del artículo podemos encontrarlo en DEL CANTILLO, A. *Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día, puestos en orden e ilustrados muchos de ellos con la historia de sus respectivas negociaciones*, Imprenta de Alegría y Charlain, Madrid, 1843: p. 78. “El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.

Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto.

Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del presente Tratado serán castigados severamente los culpados.

Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de entenderse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a comerciar.

destacaremos en nuestro análisis sus dos primeros párrafos, que regulan tanto los elementos territoriales concretos como el límite máximo de jurisdicción y, el último, que incluye una curiosa cláusula de retrocesión en beneficio de España que, según la literalidad del texto, funcionaría como una especie de derecho de tanteo.

Por supuesto, al tratarse de un acuerdo internacional que tiene más de 300 años de vigencia, debe interpretarse conforme a la terminología de su tiempo y en su contexto histórico concreto, teniendo en cuenta las circunstancias de la negociación y la práctica posterior realizada por ambas potencias firmantes. Por este motivo, debemos acudir a una norma internacional crucial para su interpretación: la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969², destacando principalmente su artículo 31 y 32³. Como dice la profesora Mangas Martín: “the interpretation in good faith of a treaty requires taking into account the ordinary meaning to be given to its terms and to its context, and in the light of its object and purpose”⁴.

Durante la exposición de esta controversia, analizaremos los argumentos jurídicos y fácticos empleados por las partes para esgrimir quién es el titular de las aguas adyacentes a Gibraltar. Como punto de partida, debemos indicar que España argumenta que Reino Unido no es titular de dichas aguas basándose en la “teoría de la costa seca”⁵, que es una doctrina o principio que establece la posibilidad de que un Estado costero no ejerza soberanía sobre las aguas contiguas al mismo. Si bien, esta tesis es contraria al principio general de derecho internacional “la tierra domina el mar”⁶, el cual se cristaliza en el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar⁷, estableciendo

Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitantes de la dicha Ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la Religión Católica Romana.

Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”.

2 VERDÚ BAEZA, J., “La Controversia sobre las aguas de Gibraltar: el mito de la costa seca”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 66, Nº 1, 2014: p. 88.

3 BOE número 142, de 13 de junio de 1980, pp. 13099 a 13110 <https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11884> (última vez consultado 17/06/2019).

4 MANGAS MARTÍN, A., “Gibraltar: adjacent waters to the territory yielded by Spain”, *New Approaches to the Law of the Sea*, 2017: p. 31.

5 Sobre esta teoría véase FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “La controversia sobre la titularidad jurídico-internacional de los espacios marítimos adyacentes a Gibraltar”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 6 Nº 2, 2015: pp. 33-45 y MANGAS MARTÍN, A., op. cit. pp. 37-38.

6 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 35.

7 En el siguiente enlace se puede consultar el Instrumento de ratificación de la CNUDM realizado por España que incluye íntegramente el articulado del tratado: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-3296> BOE número 39, de 14 de febrero de 1997, pp. 4966 a 5055 (última vez consultado

que un Estado tiene derecho a proyectar su soberanía sobre una determinada franja de mar contiguo a su territorio cuya amplitud ha variado con el paso de los siglos, si bien esta cuestión será más adelante tratada con mayor profundidad.

España, para sostener esta doctrina conforme a sus intereses, ha empleado varios argumentos jurídicos como, por ejemplo, mantener que la cesión de Gibraltar se trataba de una transmisión de la mera propiedad, sin que Reino Unido pueda ejercer sobre el Peñón derecho soberano alguno, por lo que tampoco tendría derecho a sus correspondientes aguas. Esta es una muestra de la argumentación del Gobierno español a lo largo del tiempo, aunque en este trabajo analizaremos todos los argumentos empleados y su validez jurídica conforme a los hechos y derechos relativos a la controversia.

Por último, no debemos olvidar que Gibraltar es considerado actualmente un territorio pendiente de descolonización porque, a mediados del siglo XX, surgió el derecho de autodeterminación de los pueblos con la Resolución 1514 (XV) de la ONU⁸, denominada comúnmente como la Carta Magna de la Descolonización⁹. Este hecho, sin duda, es importante para intentar establecer una solución ante el conflicto gibraltareño, debido a que, cuando se estableció la citada convención internacional sobre Derecho del Mar, se adoptó, a su vez, una resolución anexa que afectaba a los espacios marítimos adyacentes de los territorios pendientes de descolonización. Esta puede ser la pieza clave para proponer una solución jurídica a un conflicto que perdura durante más de 300 años. Sin duda, todo un reto para la comunidad jurídico-científica española.

17/06/2019).

Además, queremos reproducir el artículo 2 de la CNUSDM: “1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. 2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. 3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional”.

8 Esta Resolución se puede ver en el siguiente enlace:

<http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml> (última vez consultado 17/06/2019).

9 Llamada así por primera vez por Miaja de la Muela. Véase MIAJA DE LA MUELA, A., *La Emancipación de los Pueblos Coloniales y el Derecho Internacional*, Tecnos, Madrid, 1968: p. 6.

3. METODOLOGÍA

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado hicimos, en primer lugar, una selección de autores para la búsqueda de la más actualizada doctrina sobre el tema a tratar. Partiendo de esa base, analizamos el derecho aplicable al problema jurídico que planteamos en este trabajo: el Tratado de Utrecht, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Derecho del Mar vigente y su evolución, así como el derecho de autodeterminación de los pueblos a través de las resoluciones más relevantes relacionadas con la controversia tratada. Conjuntamente, buscamos la jurisprudencia internacional relacionada con el mismo problema jurídico y las posiciones políticas de los Estados protagonistas del conflicto. Por otra parte, hicimos una búsqueda de datos históricos relevantes. Reunido y seleccionado todo el material, (tanto en papel como información encontrada en las páginas de Internet oficiales de organismos internacionales y nacionales), además de exponer todos los datos jurídicos, políticos e históricos que conforman el grueso de este proyecto, pretendimos hacer un análisis crítico de toda la información para llegar a una serie de conclusiones finales adaptadas conforme al derecho vigente y guiadas por la doctrina jurídico-científica más relevante.

4. REFERENCIAS HISTÓRICAS RELEVANTES

Para la comprensión de este trabajo, es necesario exponer una serie de notas históricas y geográficas que contienen toda la coyuntura jurídica que pretendemos tratar sin excedernos de la finalidad y objeto del mismo.

Gibraltar es un territorio situado al sur de la Península ibérica, concretamente en la Bahía de Algeciras, cuyo estatuto jurídico, según la ONU, es el de un territorio pendiente de descolonización¹⁰. Es reclamado por España, y permanece bajo soberanía de Reino Unido. Antes de ser británico, por la cesión que se acuerda en el Tratado de Utrecht, era territorio español.

Fíjense en que, el 15 de diciembre de 1462, el rey Enrique IV otorga a la ciudad de Gibraltar una carta de privilegio que concede a esta la jurisdicción de los territorios de la Bahía de Algeciras, es decir, las actuales La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque y Algeciras, derechos que anteriormente pertenecieron a Tarifa y Jerez de la Frontera. Dicha carta es complementada a su vez con la donación de Algeciras por los Reyes Católicos en 1502. Por estas concesiones, Gibraltar se convierte en la ciudad principal del antiguo Campo de Gibraltar, destacando que los pleitos y querellas se ventilaban en la plaza de dicha ciudad. En palabras del profesor Verdú, “en definitiva, la administración y jurisdicción sobre los territorios del “Campo de Gibraltar” se centralizaban en la ciudad de Gibraltar hasta 1704”¹¹. Este hecho, sin duda será de gran relevancia para la interpretación de los términos del Tratado de Utrecht, lo que recibirá su concreta atención en apartados posteriores.

En ese año (1704), fue conquistado por la armada británica y holandesa en el contexto de la Guerra de Sucesión española por el apoyo que ambas potencias mantenían al Archiduque Carlos frente al pretendiente francés Felipe de Anjou, quien posteriormente se convertiría en Felipe V de España al finalizar la guerra. A pesar de ello, Gibraltar permaneció en manos británicas y fue cedida por la Corona española, junto con la isla de Menorca, en el Tratado de Utrecht en 1713¹².

10 Véase en el siguiente enlace la lista de los territorios pendientes de descolonización:

<http://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml> (última vez consultado 17/06/2019).

11 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 104-105.

12 *Ibidem*, pp. 84-85.

Tras esta fecha, tienen lugar una serie de incidentes de distinto carácter durante los tres siglos que permanece vigente el tratado hasta la actualidad¹³: en el siglo XVIII, los incidentes en torno a la Roca son de carácter militar; en el XIX y principios del siglo XX, los conflictos son debidos a la delimitación de las aguas portuarias de Gibraltar con motivo de la represión del contrabando y, en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, España, tras el fracaso de las negociaciones hispano-británicas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, con motivo de la posible descolonización del territorio de Gibraltar, se decanta por adoptar plenamente la teoría de la costa seca para reclamar las aguas, tanto el Gobierno franquista como todos los gobiernos democráticos. Esta teoría será expuesta más adelante.

Para enfocar aun más el contexto histórico y poder comprender plenamente los aspectos jurídicos concernientes a las aguas circundantes del territorio gibraltareño, queremos resaltar una serie de hechos históricos relevantes. Como hemos mencionado más arriba, durante el siglo XVIII los conflictos en torno a Gibraltar poseen un cariz militar, destacando los tres asedios que se sucedieron en el territorio, siendo el primero de ellos en 1704. Este fue el motivo por el cual posteriormente en 1713, Gibraltar es cedido en Utrecht a Reino Unido¹⁴. El historiador George Hills narra cómo la población española se refugia tras el asedio en distintos territorios españoles:

“El número de refugiados fue probablemente de unos 4000. Unos encontraron refugio en los pueblos de las montañas y en ciudades como Medina Sidonia, Ronda y Málaga. Los refugiados más ricos poseían propiedades dentro de los límites extensivos de la ciudad, propiedades situadas más allá del istmo (en lo que hoy día es La Línea de la Concepción y San Roque)”¹⁵.

Este hecho es relevante, ya que, como observaremos posteriormente, debemos destacar que los antiguos habitantes de Gibraltar no son los mismos moradores de la Roca en la actualidad.

El segundo asedio tuvo lugar en 1727¹⁶ y acaba, además de con las negociaciones de

13 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 88.

14 HILLS, G., *El Peñón de la discordia. Historia de Gibraltar*, Editorial San Martín, Madrid, 1974: pp. 191-206.

15 *Ibidem*, p. 205.

16 Para un mayor análisis histórico véase HILLS, G., op. cit. pp. 311-327.

Soissons, con la firma del Tratado de Sevilla el 9 de noviembre de 1729, que reitera lo pactado en Utrecht casi dos décadas antes. Según el mismo historiador, “todo volvía a Utrecht y, así indicó (el rey Felipe V) claramente que era eso lo que entendía cuando aceptó firmar el Tratado de Sevilla en 1729”¹⁷.

Para concluir el siglo XVIII, debemos destacar el denominado Gran Asedio (1779-1783), que fue el último intento armado para reconquistar lo cedido en Utrecht por parte de España y que finaliza con la Paz de Versalles el de 7 septiembre de 1783, volviendo a reafirmar lo establecido en Utrecht; si bien esto no significaba que España quisiera ceder su pretensión de la recuperación de la plaza gibraltareña, siendo relevante la carta que Floridablanca (político español del siglo XVIII) escribió a Carlos III en 1787: “hemos cedido el asunto de Gibraltar sólo por ahora. Debemos conseguir su devolución siempre que podamos, bien sea por la negociación o por la fuerza si hay guerra”¹⁸.

Con este pequeño análisis histórico del siglo XVIII, queremos resaltar que, a pesar de haber cedido en 1713 el territorio a Reino Unido, España nunca cedió en su empeño por recuperar la plaza, sea por la fuerza o por la negociación, y que no se hizo mención alguna a las aguas gibraltareñas en dicho siglo. Volviendo a la palabra negociación, es esa la perfecta descripción de lo que sucedería en el siglo XIX, ya que España y Reino Unido tratarán la controversia través del diálogo, lo cual destacaremos en los siguientes apartados de este trabajo con mayor profundidad, hecho que será muy importante a la hora de esclarecer la controversia de las aguas adyacentes. Si bien, debemos proseguir con el análisis histórico.

Durante todo el siglo XIX y hasta principios del XX se produce la ocupación paulatina del istmo de Gibraltar, hecho que sin duda alguna excede de los términos de la cesión del Tratado de Utrecht. En 1814, hubo un brote de fiebre amarilla que hizo que las autoridades españolas permitieran a parte de la población no contagiada de Gibraltar asentarse en una zona neutral (situada en el istmo) cerca de la la fortaleza de Gibraltar. Asimismo, soldados de las tropas británicas se habían asentado en 1812 en barracas situadas en la misma zona¹⁹, constituyendo ambos hechos el inicio de la ocupación del istmo gibraltareño. Ello no quedó ahí, ya que en 1854 hubo otra epidemia de la citada

17 HILLS; G., op. cit. p. 337.

18 *Ibidem*, p. 425 *in fine*.

19 *Ibidem*, p. 448.

enfermedad y las mismas autoridades volvieron a permitir la construcción de unos asentamientos al norte de los territorios cedidos en 1713; sin embargo, terminada la epidemia, se conservaron algunas estructuras a unas 600 yardas de las líneas españolas apoderándose el Reino Unido de 1450 metros de la supuesta zona neutral. Este hecho fue contestado por España en 1863²⁰, ya que consideraba que ese territorio se había convertido en un auténtico campamento para los británicos, alejándose de su estatus neutral y sobrepasando el terreno cedido en Utrecht. Finalmente, el 5 de agosto de 1908 se comunica, por parte del gobierno británico, la intención de levantar una verja en ese territorio neutral que acabaría constituyendo el actual “supuesto” límite fronterizo entre España y Gibraltar. Por supuesto, este acto fue reclamado por el gobierno español en abril de 1909 esgrimiendo que no reconocía ningún territorio británico que no se incluyera en el artículo X del tratado que recoge la cesión de Gibraltar²¹. ¿Por qué motivo expongo la ocupación del istmo? La respuesta es sencilla: este territorio tiene también aguas adyacentes que son utilizadas por Reino Unido como suyas y, con el derecho adecuado, pretendo demostrar que ni el istmo, ni sus aguas adyacentes son británicos. No pretendo ser exhaustivo con el análisis histórico sino que, en palabras del Profesor Verdú, “es necesario perfilar exactamente los términos territoriales de la cesión”²².

Por último, para concluir este apartado, debemos hablar indiscutiblemente del actual estatus colonial de Gibraltar que, como señalaremos en un apartado específico posterior, afecta al estatuto jurídico de las aguas circundantes del territorio bajo soberanía británica, o por lo menos administración de hecho. En 1946 una resolución de la ONU, la 66 (I)²³, reconoce a Gibraltar como un territorio no autónomo conforme al artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas²⁴. Aprovechando este hecho, España pretende recuperar en 1963 el territorio cedido en Utrecht, incluyendo lógicamente sus aguas adyacentes, bajo el argumento de que, en palabras de George Hills, “era víctima del colonialismo británico y lo había sido durante más de dos siglos y medio. La Gran Bretaña se había apoderado de un trozo de España, había expulsado a sus legítimos habitantes y después había intentado anexionarse más territorio español y sus aguas adyacentes”²⁵. Reino Unido

20 HILLS, G., op. cit. p. 455.

21 *Ibidem*, pp. 469-470.

22 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 104.

23 [http://www.undocs.org/A/RES/66\(I\)](http://www.undocs.org/A/RES/66(I)) (última vez consultado 17/06/2019), véase concretamente la página 124 *in fine*.

24 https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf (última vez consultado 17/06/2019), véase el artículo 73 para más información.

25 HILLS, G., op. cit. p. 543.

mantiene que Gibraltar no es una colonia y que es parte integrante del territorio británico según lo dispuesto en Utrecht, por lo que también tiene derecho a sus aguas adyacentes. La ONU, por su parte, insta a Reino Unido y España para que lleguen a un acuerdo sobre la controversia mediante una serie de resoluciones de conformidad con la Resolución 1514 (XV). Las negociaciones fracasan hasta tal punto que, en correlación con una serie de incidentes marítimos y aéreos en el territorio, se termina cerrando la frontera entre España y Gibraltar, comúnmente conocida como la Verja, en 1969²⁶. Posteriormente se vuelve a abrir en 1982²⁷, pero, más que destacar el cierre y la apertura de la frontera, queremos resaltar el fracaso continuo de las negociaciones de ambos Estados, dando como resultado un régimen incierto de las aguas adyacentes.

Toda esta suma de antecedentes históricos nos ayudará a interpretar los aspectos jurídicos del conflicto hispano-británico. Debemos entender esta coyuntura para desgranar los términos redactados en Utrecht, la evolución correlativa del Derecho del Mar y la aparición en el siglo XX del derecho de autodeterminación de los pueblos. La suma de estos tres pilares jurídicos pueden dar solución a un problema que parece no tener fin. Dicho esto, en los siguientes apartados abarcaremos los derechos citados con las correspondientes posiciones de los Estados involucrados para llegar a una serie de conclusiones. Sin duda, el origen del conflicto jurídico se remonta a 1713 en Utrecht.

26 VERDÚ BAEZA, J., op. cit, pág. 101.

27 https://elpais.com/diario/1982/12/15/portada/408754801_850215.html
(última vez consultado 17/06/2019).

5. EL ARTÍCULO X DEL TRATADO DE UTRECHT

Visto el análisis histórico del conflicto gibraltareño, toca ahora abordar su aspecto jurídico tomando como punto de partida el Tratado de Utrecht, firmado en 1713 por las potencias citadas en los apartados anteriores. El problema principal que tiene este tratado internacional es su interpretación. Actualmente, no se sabe con seguridad a quién pertenece la titularidad de las aguas adyacentes a Gibraltar (hay posturas divergentes de los Estados implicados) y este hecho trajo consigo una serie de conflictos, como el pesquero y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de ambos Estados, además de su faceta diplomática inherente²⁸, debido a que ambos Estados pretenden ejercer sus derechos correspondientes a la soberanía. Esta controversia dura más de 300 años y para buscar soluciones debemos acudir a la fuente jurídica primaria, que no es otra que el citado tratado. Debemos señalar previamente que este tratado es aceptado por España y Reino Unido como título jurídico válido de cesión del territorio gibraltareño. Como ejemplo de la aceptación, podemos mostrar el siguiente Comunicado del Secretario de Estado británico al Gobernador de Gibraltar de 2006²⁹:

“Como un territorio separado, reconocido por las Naciones Unidas e incluido desde 1946 en su lista de territorios no autónomos, Gibraltar goza de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, el Gobierno de Su Majestad apoya el derecho de autodeterminación del pueblo de Gibraltar, promovido de acuerdo con los otros principios y derechos de la Carta de Naciones Unidas, excepto en lo que se refiere a la posición del Gobierno de Su Majestad que ha sido expresado tanto en el Parlamento como en otros foros en numerosas ocasiones, según el cual el artículo X del Tratado de Utrecht da a España el derecho de retracto en caso de renuncia británica sobre su soberanía. Por tanto, es la posición del Gobierno de Su Majestad que no hay limitación a ese

28 Pueden verse numerosas noticias en distintos periódicos y medios digitales que narran los citados hechos, por ejemplo: “Exteriores sopesa llevar el contencioso de Gibraltar a los foros internacionales”, El País, 11 de agosto de 2013. “La Guardia Civil se encara con tres patrulleras del Peñón que acosaban a tres pesqueros”, El País, 25 de mayo de 2012. “La Royal Navy patrulla en la Bahía. La fragata HMS Sutherland acude a Gibraltar para misiones de seguridad marítima en plena discrepancia sobre la soberanía de las aguas”, Europa Sur, 13 de diciembre de 2012. “La Royal Navy incrementa el hostigamiento a la Armada en vísperas del Brexit”, El Confidencial Digital, 20 de marzo de 2019. Independientemente de la ideología política de cualquier periódico, no hay duda de que muestran un escenario conflictivo fruto del desacuerdo concerniente a la soberanía de las aguas circundantes al Peñón.

29 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 87.

derecho, la independencia solo será una opción para Gibraltar si media el consentimiento de España”³⁰.

En este documento se muestra como Reino Unido reconoce los derechos de España según el artículo X del mencionado tratado, por lo que se deduce la aceptación de su validez jurídica. Ahora bien, debemos desglosar el artículo que regula la cesión para tratar de interpretar su contenido y llegar al fondo del asunto. En lo que respecta a la interpretación de tratados internacionales, utilizaremos los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. El artículo X del Tratado de Utrecht regula la cesión de una serie de elementos territoriales concretos en su primer párrafo:

“El Rey Católico...cede...la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”³¹.

Como podemos observar, se cede la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar según la redacción literal del artículo. Conforme a lo establecido por el artículo 31.1 de la CVDT “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”³². Parece claro pues que se trata de una cesión de elementos territoriales correctamente definidos. Por ello, debemos descartar que el istmo sea incluido en la cesión, constituyendo dicho elemento territorial otra controversia distinta con un título jurídico diferente alegado por Reino Unido, la cual debemos eliminar por la necesidad de perfilar nuestro trabajo, pues las aguas adyacentes controvertidas parten de los elementos territoriales recogidos en el artículo que estamos tratando. La doctrina parece unánime en descartar al istmo de la cesión, además de lo ya dicho en el análisis histórico sobre este tema, queremos recalcar las siguientes aportaciones doctrinales: el Profesor Jesús Verdú dice:

30 Despatch from the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, to His Excellency the Governor of Gibraltar. Margaret Beckett, 14 de diciembre de 2006.

31 Artículo X del Tratado de Utrecht, véase DEL CANTILLO, A., op. cit. p. 78.

32 Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969.

“El Reino Unido alega dos títulos jurídicos bien diferentes sobre el territorio de Gibraltar...y la prescripción adquisitiva sobre el territorio del istmo...Al ser este último contestado por España, indudablemente la controversia se proyecta en una doble perspectiva sobre los espacios marinos adyacentes al territorio del istmo”³³.

Por su parte, el profesor Fernández Sánchez explica que “soy (es) consciente que la complejidad del problema abarca igualmente una distinción entre las aguas proyectadas por el Istmo, espacio ocupado de forma ilegal por el Reino Unido y sobre el que España siempre ha sido objetor persistente, por lo que Reino Unido no puede utilizar la doctrina de la prescripción adquisitiva”³⁴.

Para concluir con este tema, Araceli Mangas deja fuera también el territorio del istmo en sus conclusiones: “it is obvious that I exclude from my consideration the waters adjacent to the isthmus, because it was not included in the yielded made by Spain”³⁵. Con todo ello pretendemos dejar claro que ni el istmo, ni consecuentemente sus aguas adyacentes, quedan bajo la cesión del artículo X del Tratado de Utrecht.

Cuestión aparte sería el tema de la montaña calpense, la cual algunos autores, como el profesor Alejandro del Valle, sostienen que se excluye de la cesión territorial debido a que, en palabras del mismo profesor, “una hipótesis admisible es que durante las negociaciones...se acordara la cesión solo del territorio intramuros de la Plaza” y que además, no hay referencias expresas a la transmisión de elementos naturales en el artículo X del Tratado de Utrecht³⁶. Por el contrario, la profesora Araceli Mangas argumenta que la Roca se incluye en la cesión porque las autoridades españolas, tanto civiles como militares, desalojaron las áreas bajo ocupación militar, incluida la montaña, que constituye el elemento de defensa más importante para la artillería británica³⁷. Esta posición encaja con el enunciado del artículo X, ya que entre los elementos territoriales cedidos se encuentran las defensas, sin especificar si son naturales o artificiales, por lo que la posición de la profesora Mangas parece lógica conforme a derecho. Además,

33 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 84.

34 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 16.

35 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 31.

36 VALLE GÁLVEZ, A. DEL, “España y la Cuestión de Gibraltar a los 300 años del Tratado de Utrecht”, *ARI, Real Instituto Elcano*, nº 23, 2013, p. 9. y VALLE GÁLVEZ, A. DEL, “¿De verdad cedimos el Peñón? Opciones estratégicas de España sobre Gibraltar a los 300 del Tratado de Utrecht”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LXV(2), 2013, pp. 124-125.

37 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 32.

según el profesor Fernández Sánchez, sostener que no se cedió la montaña es difícil porque en este caso podría oponerse la doctrina de la prescripción adquisitiva, ya que ese territorio concreto ha sido administrado por los británicos durante más de 300 años sin objeción alguna³⁸. No pretendemos ser exhaustivo con nuestro análisis jurídico, pero hay que aclarar que desde el territorio de la montaña se proyectan espacios marítimos en las caras este y sur del Peñón, por lo que es necesario precisar que la montaña también fue objeto de cesión.

En cuanto a las aguas adyacentes a la Roca, tema vertebral de este trabajo, no se hace mención expresa alguna en el tratado a una cesión de las mismas, ahora bien, en lo que respecta a la interpretación del tratado según los artículos 31.3 b), 31.3 c) y 32 de la CVDT, “juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes” y “se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31”. ¿Por qué exponemos este articulado? En cuanto al derecho internacional aplicable a la interpretación del artículo X, tenemos que utilizar, en el contexto de la cesión y su posterior evolución, el Derecho del Mar, indudablemente, que regula el régimen de las aguas adyacentes y establece cuándo un Estado tiene derecho a tener bajo su soberanía las citadas aguas. Debemos destacar también que, a pesar de no haber ninguna mención de la transferencia de soberanía de tales aguas, tampoco hay ningún indicio de restricción de que los elementos territoriales proyecten aguas adyacentes en el propio tratado, ni en los trabajos preparatorios del mismo y tampoco en el ejercicio fáctico de la soberanía de Reino Unido sobre las aguas adyacentes a la Roca, al menos en los siglos XVIII y XIX. Todas estas ideas serán desarrolladas con posterioridad cuando hablemos sobre las posiciones concretas de ambos Estados con respecto al conflicto de las aguas, pero dejamos claro que el Derecho del Mar jugará un papel importante en la interpretación del tratado con su principio general “la tierra domina el mar”, el cual ya se encuentra regulado en la CNUDM de 1982.

Prosiguiendo con los términos del tratado, encontramos la siguiente expresión que ha sido objeto de controversias en el conflicto de las aguas, igualmente por su interpretación:

38 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 32.

“Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra”³⁹.

De este fragmento del artículo X debemos destacar la expresión “sin jurisdicción territorial alguna”, ya que tiene diferentes interpretaciones según la doctrina, por lo que deberemos rescatar algunos hechos históricos citados anteriormente para clarificar su significado en el sentido de, en palabras del Profesor Verdú, zanjar que ningún otro territorio del Campo de Gibraltar es cedido en virtud del artículo X del controvertido tratado, coincidiendo con el análisis del Profesor Levie⁴⁰. Este fragmento será interpretado por parte de España para negar que Reino tiene jurisdicción sobre las aguas contiguas a Gibraltar.

Para continuar con este apartado, es necesario exponer otro fragmento importante del citado artículo X que regula una cláusula de retrocesión del territorio cedido por España:

“Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar...la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”.

Este fragmento debe ser incluido en el análisis, ya que cabe la posibilidad de la devolución del Peñón a España, lo que solucionaría la controversia de la titularidad de las aguas adyacentes a la Roca porque, sin duda alguna, serían aguas españolas al producirse el retracto. Es significativo que, además de Gibraltar, en el artículo XI del Tratado de Utrecht, se cedió la isla de Menorca, el cual contenía un derecho de retrocesión para España redactado de forma similar al establecido para la posible devolución del Peñón. Este derecho se cumplió en el Tratado de Amiens de 1802⁴¹, mediante el cual España recupera la isla de Menorca en un contexto bélico pero válido jurídicamente. Por ello, no es descabellado pensar que pueda producirse algún día la retrocesión gibraltareña, ya que este derecho es incluso reconocido por Reino Unido tal y

39 Artículo X del Tratado de Utrecht, DEL CANTILLO, A., op. cit. p. 78.

40 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 86 y LEVIE, H.S., *The Status of Gibraltar*, Colorado, Boulder, 1983, p. 32.

41 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 94. Para ver el artículo XI que regula la cesión de la isla de Menorca, véase DEL CANTILLO, A., op. cit. pp. 78-79.

como hemos indicado en el fragmento del Comunicado *ut supra dixit*.

Para finalizar, debemos advertir que dada la fecha en la que fue concebido este tratado, hay partes claramente contrarias a *Ius cogens* (normas de Derecho imperativo), como la relativa a la prohibición de que “judíos y moros” puedan habitar en el Peñón, lo que conlleva su nulidad⁴². Expuesto el análisis jurídico del artículo concreto que regula la cesión de Gibraltar a España, pretendemos mostrar las posiciones político-jurídicas de los Estados implicados en el conflicto en los siguientes apartados.

⁴² VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 8 *in fine*. Para ver el texto íntegro del artículo X del Tratado de Utrecht, se hizo la transcripción correspondiente en la nota a pie de página número 1 de este trabajo.

6. POSICIÓN ESPAÑOLA EN LA INTERPRETACIÓN DEL TRATADO DE UTRECHT: LA TEORÍA DE LA COSTA SECA

A mitad del siglo XX, tras el fracaso de las negociaciones de la ONU, España empieza a esgrimir la denominada teoría de la costa seca para referirse a los términos de la cesión de Gibraltar, mediante la cual niega que las aguas circundantes al Peñón sean de titularidad inglesa. ¿Qué quiere decir esta teoría? Según el principio general de derecho internacional “la tierra domina el mar”, cualquier Estado costero tiene derecho a proyectar soberanía sobre un determinado espacio marítimo adyacente a su costa, cuya amplitud ha evolucionado a lo largo de los siglos. Pues bien, la teoría de la costa seca permite modular ese derecho y hacer que una costa no genere ese espacio marino soberano perteneciente al Estado ribereño, permitiendo que esas aguas queden bajo la soberanía de otro Estado; si bien, al ser una regla excepcional, la misma requeriría un acuerdo expreso por parte de los Estados interesados en el asunto, ya que, como dice la profesora Araceli Mangas: “the restriction of the sovereignty cannot be made in a unilateral way”.⁴³

Para avalar esta teoría, España ha usado una serie de argumentos político-jurídicos que requieren un breve análisis por nuestra parte y que se basan en la interpretación literal del artículo X del Tratado de Utrecht. En primer lugar, España ha interpretado el tratado en el sentido de que la cesión territorial no fue de soberanía sino que fue en propiedad, es decir, como si España hubiera transmitido un bien inmueble a Reino Unido y Gibraltar fuera una finca dentro del territorio español, por lo que no podría generar aguas jurisdiccionales. Todo ello se deduce por la redacción literal del artículo X del Tratado de Utrecht, que dice: “el Rey Católico (España)...cede...la plena y entera *propiedad* de la ciudad, castillos...dando la dicha *propiedad* absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho...sin excepción ni impedimento alguno”. Como acabamos de ver, en la regulación se emplea el término propiedad, no la palabra soberanía. Esta tesis es apoyada por el profesor De Azcárraga Bustamante⁴⁴, quien afirma que la propiedad se cedió sin jurisdicción alguna, es decir, sin derechos soberanos, aunque el término propiedad se matizara con las expresiones “plena y sin excepción ni impedimento alguno”.

43 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 37.

44 DE AZCÁRRAGA BUSTAMANTE, J.L., “Las aguas españolas de Gibraltar (la Bahía de Algeciras a la luz del Derecho Internacional)”, *Estudios de Derecho Internacional público y privado. Homenaje al Profesor Luis Sela Stampil*, Vol. 2, 1970, pp. 155-156.

Este argumento ha encontrado numerosos obstáculos para el sostenimiento de la teoría de la costa seca y, en sentido contrario al mismo, podemos citar la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 12 de abril de 1960 sobre el derecho de paso de Portugal sobre el territorio Indio, la cual es utilizada en la obra de la profesora Izquierdo Sans para sostener que no existe la figura de cesión territorial sin soberanía: la intención de transferir un territorio no indica el empleo de dicho término y, a juicio del mismo tribunal, la cesión es un acto jurídico que implica la transferencia de la soberanía⁴⁵. En el mismo sentido, el profesor Levie afirma que durante las negociaciones no hubo intención de las partes de limitar la cesión y que de haber sido esa la finalidad debió hacerse de forma expresa⁴⁶. Debemos destacar también un informe sobre el contencioso de Gibraltar del propio Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español que afirma que “Gibraltar es un territorio bajo soberanía del Reino Unido, sobre el que recae una reivindicación por parte de España y sobre cuyos límites existe una controversia”⁴⁷. Parece quedar claro que esta línea argumental española para sostener la teoría de la costa seca es bastante débil viendo las tesis *a sensu contrario*, por lo que entendemos que sí hay una cesión soberana del territorio gibraltareño y que puede generar espacios marinos.

Ahora bien, no fue esta la única tesis argumental empleada por España para mantener la teoría de la costa seca como postura oficial ante el conflicto de las aguas que rodean Gibraltar; se utiliza también el argumento que sostiene que la cesión solo abarca las aguas interiores del puerto de Gibraltar debido a que este es el único elemento recogido en el tratado que incluye aguas interiores⁴⁸. El profesor De Azcárraga vuelve a ser protagonista de esta posición doctrinal y afirma que España, al ceder el puerto, cede sus aguas interiores, pero no las aguas jurisdiccionales adyacentes⁴⁹. En este sentido, se pronuncia también el profesor Fernández Sánchez, quien afirma que la existencia de un puerto de Gibraltar en 1713, que se hizo constar en el traspaso producido en el Tratado de Utrecht, lleva a la conclusión de que Reino Unido es el administrador actual de las aguas interiores del puerto gibraltareño, si bien el autor no utiliza el término “soberano” de Gibraltar⁵⁰. Aún siendo así la literalidad del texto cedente, existen argumentos que

45 IZQUIERDO SANS, C., *Gibraltar en la unión Europea. Consecuencias sobre el contencioso hispánico-británico y el proceso de construcción europea*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 29 y VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 90.

46 LEVIE, H.S., op. cit. p. 31.

47 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, *La cuestión de Gibraltar*, Madrid, 2008, pág. 24.

48 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 93-101.

49 DE AZCÁRRAGA BUSTAMANTE, J.L., op. cit. p. 146.

50 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 22.

pretenden derribar esta otra línea argumental favorable a la costa seca: en el mismo Tratado de Utrecht, también se cedió el puerto de la isla de Menorca pero nunca se cuestionó que tal cesión solo abarcara las aguas portuarias y no las que rodeaban el resto de la isla⁵¹. Además, debemos destacar la oposición de la tesis del profesor Levie y del profesor Verdú que sostienen que:

“No hay mención de cesión de aguas territoriales en otras cesiones territoriales realizadas en el conjunto de tratados que se firmaron en Utrecht y no hemos encontrado ningún tratado de cesión territorial de los siglos XVIII, XIX e incluso XX que mencione expresamente la cesión de las aguas adyacentes al territorio cedido”⁵².

Hubiera sido interesante y novedoso que la cesión del Tratado de Utrecht hubiera contenido una cláusula de restricción al derecho soberano del mar adyacente para que quedara claro el principio de la costa seca pero simplemente no se negoció, ni se reguló.

Por si fuera poco, la práctica española posterior a la firma del tratado, concretamente la del siglo XIX, provoca aun más confusión con respecto a la defensa de la teoría de la cosa seca. Previamente, en el siglo XVIII, era habitual que los buques ingleses emplearan el fondeadero natural de Punta Mala (dentro de la Bahía de Algeciras) y estos pagasen derechos de puerto a las autoridades inglesas. Este hecho es de gran relevancia a la hora de interpretar el tratado ya que, según el artículo 31.3 b) del CVDT, “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado constandingo acuerdo entre las partes habrá de tenerse en cuenta para la interpretación del tratado”.

Dicho esto, nos preguntamos si España negaba estos hechos o si por el contrario los aceptaba. Si bien es sabido que la teoría de la costa seca se utiliza desde mediados del siglo XX, durante el siglo XIX parece que hay una admisión tácita por parte de España en el reconocimiento de aguas inglesas. De hecho, el problema no se centraba en si había aguas inglesas o no, sino que el problema radicaba en hasta dónde llegaba el puerto de Gibraltar, por lo que durante este siglo se negoció la extensión de sus aguas. El Secretario de Estado Británico para Asuntos Exteriores Cannig afirmó en 1826 que el

51 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 94.

52 *Ibidem*, p. 94 y LEVIE, H.S., op. cit. p. 85.

puerto de Gibraltar llegaba hasta Punta Mala (en el interior de la bahía), quedando parte del territorio español sin proyección marítima⁵³. Este hecho dio lugar a la contestación por parte de España, siendo de gran relevancia la Nota del Ministro de Estado, Marqués de Miraflores, sosteniendo que es absurdo que exista un puerto inglés cuyas aguas fueran inglesas pero la costa fuera española⁵⁴. Los ingleses pretendían sostener la teoría de la costa seca en parte de la costa española durante el siglo XIX y al Gobierno español le parecía absurda, si bien ahora es su tesis oficial ante el conflicto de las aguas.

A pesar de todo, lo importante es que parece que hay una aceptación tácita de la existencia de aguas gibraltareñas, aunque el problema se centrara en ese momento en su delimitación y no en su negación. Prueba definitiva de ello fue la promulgación por parte del Gobierno español del Real Decreto de 10 de diciembre de 1876 que consideraba como aguas inglesas las comprendidas al oeste, entre las faldas del Peñón y la línea recta que partiendo de Punta Mala en dirección a Sierra Bullones (Ceuta) pase a dos millas de Punta Europa, y al sur y al este, una extensión de tres millas, si bien a los efectos de persecución del fraude⁵⁵.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la profesora Mangas Martín y afirma que España permitió que Reino Unido aplicara su propio *ius puniendi*, ejerciendo por tanto poderes soberanos, sobre el espacio marítimo regulado por el citado decreto. Según la misma profesora esta normativa supone un claro reconocimiento tácito de las aguas gibraltareñas, lo que impide al Gobierno español sostener la teoría de la costa seca⁵⁶.

Este decreto estuvo en vigor casi 100 años hasta la entrada en vigor del Decreto 2671/1967, de 19 de octubre, que delimitaba las aguas del Puerto de Algeciras, el cual incluía el fondeadero de Punta Mala⁵⁷. A pesar de que el anterior Real Decreto se regulase a efectos de represión del contrabando y no reconociera la soberanía inglesa de forma expresa, no hay duda de que era un reconocimiento tácito de la soberanía de Reino Unido sobre las aguas de Gibraltar, ya que podía ejercer poderes inherentes a la misma. El problema no era la negación de las aguas sino la extensión de las mismas, cuestión que se tratará en un apartado posterior referido al Derecho del Mar.

53 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, *Libro Rojo sobre Gibraltar*, Madrid, 1966, p. 181.

54 Esta nota la encontramos en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 96.

55 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 96-97.

56 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. pp. 38-39.

57 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 99-100.

Otro motivo por el cual se pretende defender la doctrina de la costa seca se centra en la expresión regulada en el Tratado de Utrecht “*sin jurisdicción territorial alguna*”, ya que se interpreta esta redacción en el sentido de que solo se ceden los elementos territoriales citados en el mismo (ciudad, castillos, puerto, defensas y fortalezas) excluyendo los espacios marinos adyacentes. Esta teoría es defendida por José Uxó Palasi, autor citado por la doctrina favorable de la costa seca, quien explica que, según la expresión citada, no se hacía ninguna clase de cesión en cuanto a la soberanía sobre las aguas del Peñón⁵⁸. Para contrarrestar esta posición doctrinal, debemos decir que dicha expresión fue incluida en el tratado por dos razones: la primera de ellas es que durante las negociaciones del Tratado de Utrecht los británicos querían obtener una mayor extensión de territorio que el resultado final plasmado en el tratado. Muestra de ello es una carta de 10 de mayo de 1712 de los negociadores franceses, quienes representaban los intereses españoles, la cual debemos reproducir:

“Sin embargo, Gran Bretaña pedía ahora que sean cedidas a Inglaterra una extensión de territorio alrededor de Gibraltar equivalente a la distancia de dos disparos de cañón y toda la isla de Menorca”⁵⁹.

En este documento se puede ver cómo los británicos pedían más terrenos que los que, al final, fueron cedidos.

El segundo motivo es que Gibraltar, a principios del siglo XVIII, era la capital de los territorios vecinos (lo que hoy se conoce como Campo de Gibraltar), por lo que ejercía jurisdicción sobre el mismo. Este territorio incluía grandes extensiones en la Bahía de Algeciras⁶⁰. Se puede ver detalladamente en el análisis histórico de este trabajo (cuarto apartado) qué concesiones se hicieron en favor de la ciudad de Gibraltar en el tercer párrafo del mismo. Por ambos motivos la redacción final del artículo X del Tratado de Utrecht tenía la intención de restringir la jurisdicción a solo los elementos territoriales regulados. Si bien, esto no impediría que dichos elementos generen espacios marinos pues la limitación solo se refiere a espacios terrestres y como hemos apuntado antes, no hay acuerdo expreso en el tratado para impedir la jurisdicción sobre aguas contiguas y durante las negociaciones no hubo intención de restringir la cesión en este sentido.

58 UXÓ PALASI, J., “Gibraltar. La soberanía sobre sus aguas”, *Revista Veintiuno*, nº 44, 1999-2000, p. 44.

59 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 61.

60 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 33 y VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 104-105.

Por otra parte, y como último argumento para la defensa de la teoría de la costa seca, España alega la existencia de derechos históricos sobre esas aguas basándose en la regulación del artículo 15 de la CVNUDM⁶¹, que incluye una excepción a la regla general de la división equitativa del mar territorial en el caso de costas adyacentes o enfrentadas, tal y como sucede en la Bahía de Algeciras. Los supuestos derechos históricos alegados se sustentan en la simple lectura literal del Tratado de Utrecht sin crítica adicional, de manera que al no haber mención alguna a las aguas adyacentes al Peñón, se excluyeron de la cesión y el resultado es que el Estado español sería el titular de dichas aguas en virtud del Tratado de Utrecht. La calificación de derechos históricos suponemos que se refiere a que el mismo tratado es anterior a la CNUDM, la cual constituye la regulación general de los espacios marinos, y este sería una excepción a la regla general, tal y como afirma el profesor Fernández Sánchez en su trabajo cuando dice que el Tratado de Utrecht es una regla especial y el tratado sobre Derecho del Mar, la regla general, por lo que la primera tiene preferencia de aplicación sobre la segunda⁶². Esta posición argumental española basada en la simple lectura del tratado de Utrecht puede observarse en las declaraciones y comunicados oficiales ante la firma de todo convenio internacional relativo al Derecho del Mar que pudiera perjudicar la posición española de la costa seca⁶³. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de 12 de julio de 2007, la cual debemos reproducir:

“En caso de costas adyacentes o enfrentadas, como existen en el Estrecho de Gibraltar la Convención prevé una excepción al régimen general de la línea media equidistante cuando, por la existencia de derechos históricos, sea necesario delimitar el mar territorial del forma distinta. En este sentido cabe recordar que España no reconoce la soberanía o jurisdicción británica sobre otros espacios que los expresamente cedidos en el artículo X del Tratado de Utrecht. Es decir, la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortaleza que le pertenecen. Por tanto, el Peñón no genera espacios marinos y los espacios adyacentes a la costa gibraltareña son espacios sometidos a la soberanía y

61 Véase el citado artículo en el siguiente enlace: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-3296> (última vez consultado 17/06/2019).

62 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. pp. 27-32.

63 Para ratificar la CNUDM, España formuló la siguiente declaración que defiende los supuestos derechos soberanos sobre las aguas de la Bahía de Algeciras basándose en la simple lectura del Tratado de Utrecht: “No puede ser interpretado (el tratado) como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713”. BOE de 14 de febrero de 1997.

jurisdicción de España”⁶⁴.

Esta tesis argumental tiene un claro problema y es que, al tratarse de una delimitación que afecta a terceros Estados, España no puede aplicar la doctrina de la costa seca de forma unilateral, ya que según la Sentencia de 18 de diciembre de 1951 el Tribunal Internacional de Justicia, en el asunto *Pesquerías*, dictaminó que:

“La delimitación de los espacios marítimos tiene siempre un aspecto internacional; no puede depender de la sola voluntad del Estado ribereño tal como se expresa en su derecho interno. Si es verdad que el acto de delimitación es necesariamente un acto unilateral, porque sólo el Estado ribereño tiene competencias para verificarlo, por el contrario, la validez de la delimitación respecto a terceros Estados depende del Derecho internacional”⁶⁵.

Por ello, aunque España pretenda aplicar la teoría de la costa en la delimitación de las aguas de la Bahía de Algeciras, Reino Unido debe otorgar validez a la misma y está claro que el conflicto perdura a través del tiempo y no se llega a un acuerdo de delimitación sobre las aguas circundantes al Peñón de Gibraltar. Queda claro que la teoría de la costa seca española se basa en la literalidad del artículo X del Tratado de Utrecht y en la interpretación de algunas de sus expresiones en el sentido de que las aguas circundantes al Peñón fueran excluidas en la cesión. Si bien esta teoría solo se sostiene por la posición unilateral de España y ello es insuficiente para tener validez jurídica en Derecho Internacional. Antes de entrar a analizar la postura británica, cerraremos este apartado con una cita que hace el profesor Fernández Sánchez en su trabajo de Nweid Kaldone: “la costa seca, la costa que no engendra mar territorial, puede darse, pero a título excepcional y en forma convencional”⁶⁶. Dicho esto, España podría esgrimir esta posición jurídica pero requeriría un título jurídico (un acuerdo con Reino Unido) que tenga preferencia de aplicación sobre el principio general “la tierra domina el mar”.

64 NOTA VERBAL 151/11, de 12 de julio 2007, citada en MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES, op. cit. p. 14.

65 Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 18 de diciembre de 1951, Asunto *Pesquerías*, página 132.

66 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 33.

7. POSICIÓN BRITÁNICA: THE BRITISH GIBRALTAR TERRITORIAL WATERS

Expuesta ya la posición española ante el conflicto sobre la titularidad de las aguas gibraltareñas, que se resume en la teoría de la costa seca, vamos a proceder a la descripción del posicionamiento británico ante la misma controversia.

Desde la toma Gibraltar en 1704, los británicos ejercen el efectivo control jurisdiccional sobre las aguas circundantes al Peñón. Pero, ¿a qué nos referimos con la expresión “control jurisdiccional”? Siguiendo las palabras de la Profesora Inmaculada González, la regulación y control sobre las aguas gibraltareñas se corresponde con las siguientes actividades: tráfico marítimo, prevención marítima, fondeo para el abastecimiento de fuel de barcos, actividades de investigación y conservación y gestión de los recursos pesqueros⁶⁷. Todas estas actividades han sido desarrolladas por los británicos en las aguas circundantes al Peñón sosteniendo que son los titulares de la soberanía de estas.

A pesar de ello, a partir de la década de los sesenta, España argumenta que no cedió las aguas de Gibraltar en el Tratado de Utrecht, a excepción de las portuarias, empleando la teoría de la costa seca. Para contrarrestar esta tesis, Reino Unido, en el marco de las negociaciones hispano-británicas promovidas por la ONU, cuyo objetivo era la descolonización de Gibraltar, expresa su posición en un escrito con fecha de 10 de octubre de 1966, en el que declara lo siguiente:

“No se puede justificar la afirmación de que los límites de las aguas territoriales de Gibraltar están fijadas en el artículo X del Tratado de Utrecht y comprenden únicamente las aguas del puerto.

El hecho de que en el Tratado se cediese específica y únicamente el Puerto de Gibraltar, sin hacerse mención alguna de aguas territoriales, es irrelevante, ya que desde hace tiempo se reconoce que toda cesión de territorio comprende automáticamente la cesión de las aguas jurisdiccionales adyacentes, a no ser que se declare específicamente lo contrario.

El Gobierno de Su Majestad siempre ha estado y sigue dispuesto a negociar con el español la división de las aguas territoriales en la Bahía de Gibraltar; pero, no

67 DEL VALLE GÁLVEZ, A. y GONZÁLEZ GARCÍA, I., “La Bahía de Algeciras y las aguas españolas”, *Gibraltar, 300 años*, 2004, p. 226.

existiendo un acuerdo negociado, el Gobierno de Su Majestad fundamenta su derecho a la jurisdicción sobre las aguas adyacentes a Gibraltar en los principios generales del Derecho internacional”⁶⁸.

En este documento se muestra cómo Reino Unido sostiene que es titular de las aguas adyacentes a Gibraltar en virtud del Tratado de Utrecht y de los principios generales de Derecho internacional, refiriéndose, sin duda alguna, al principio “la tierra domina al mar” y niega la teoría de la costa seca sostenida por España. Ahora bien, no especifica la delimitación exacta de los espacios marinos contiguos a la Roca. Si bien, tras la ratificación de la CNUDM, Reino Unido delimita las aguas territoriales, valiéndose de los derechos regulados en la misma convención, llegando al siguiente resultado: milla y media hacia el oeste, en el interior de la Bahía, que corresponde de manera aproximada a la línea media equidistante, y tres millas en la zona sur y este, donde no se encontraría con espacios marítimos españoles⁶⁹. Para corroborar esta delimitación, se publica en el diario oficial de junio de 1987, *The Gibraltar Gazette*, un mapa detallando dichas aguas jurisdiccionales y nombrándolas como *The British Gibraltar Territorial Waters* o BGTW⁷⁰ (Las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar), delimitación que se corresponde con la realizada en las cartas náuticas oficiales del Almirantazgo británico⁷¹. En esta publicación oficial se muestra la delimitación exacta de dichas aguas, precisando aun más la descripción general ya comentada incluyendo un pequeño arco de aguas de dos millas en línea con la Verja que se extiende un cuarto de milla al norte de esta línea, el cual no respeta el principio de equidistancia y que se superpone sobre aguas de la zona portuaria de la Línea de la Concepción.

La única explicación posible de este hecho es que, durante el siglo XIX, tal y como hemos dicho en apartados anteriores, esa determinada zona se utilizaba para el fondeo de buques ingleses y, hasta la década de los años sesenta del siglo XX, España aceptaba este hecho tácitamente. Por lo que esta delimitación se correspondería de forma similar con la posición del Secretario de Estado Británico para Asuntos Exteriores Canning en

68 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, *Un nuevo libro rojo sobre Gibraltar*, Madrid, 1968, p. 501.

Citado en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 110.

69 O'REILLY, “Gibraltar: Sovereignty Disputes and Territorial Waters”, *Boundary and Security Bulletin*, nº 1, vol. 7, 1999, pp. 67-81. Citado en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 111.

70 UXÓ PALASI, J., op. cit. p. 27. Citado en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 111.

71 DEL VALLE GÁLVEZ, A. y GONZÁLEZ GARCÍA, I., “La Bahía de Algeciras y las aguas españolas”, *Gibraltar, 300 años*, 2004, p. 459.

1826 en lo que respecta a la demarcación de las aguas del puerto de Gibraltar y con la delimitación que el propio Estado español realiza en 1876 en virtud del Real Decreto de 10 de diciembre a efectos de represión del contrabando.

Para respaldar aun más su posición , el Gobierno de Gibraltar incluye ese conjunto de aguas, como espacio natural protegido, en una normativa propia denominada Nature Protection Act en 1991 y posteriormente, en febrero de 2011, precisa su regulación, en una enmienda a la misma norma y en la normativa gibraltareña de transposición de la Directiva Marco sobre Estrategia Marina de la Unión Europea, afirmando que la delimitación de las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar (tres millas náuticas en las zonas sur y este y línea media equidistante en la Bahía de Gibraltar/Algeciras) ha sido establecida conforme a los límites de la CNUDM^{72 73}.

Ahora bien, ¿es válida la delimitación que Reino Unido hace conforme a la CNUDM? Para contestar a esta cuestión y esclarecer si Reino Unido/Gibraltar tiene derecho a la titularidad de las aguas adyacentes al Peñón de Gibraltar debemos a analizar el Derecho internacional del mar vigente.

72 GIBRALTAR GAZZETTE, 10 de febrero de 2011.

73 Todas estas citas podemos encontrarlas en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 111-112.

8. EL DERECHO DEL MAR Y SU DESARROLLO: APLICACIÓN EN LA CONTROVERSIA DE LAS AGUAS GIBALTAREÑAS

Vistas las posiciones jurídico-políticas de ambos Estados implicados en el conflicto de las aguas adyacentes al territorio del Peñón, que tiene su origen en una interpretación divergente del Tratado de Utrecht, por el que se cede Gibraltar a Reino Unido, debemos hacer un análisis del Derecho del Mar aplicable a tal controversia.

Como ya hemos señalado, España argumenta, mediante la teoría de la costa seca, que no cedió ningún espacio marítimo en Utrecht, salvo las aguas interiores del Puerto de Gibraltar. Por el contrario, Reino Unido esgrime que es el titular de las aguas adyacentes a la Roca porque, al cederse los elementos territoriales ribereños, se ceden automáticamente los espacios marinos contiguos, de manera que, para ver limitado su derecho de soberanía sobre las aguas territoriales, se debería establecer un acuerdo expreso en tal sentido.

Ahora bien, debemos partir del origen del Derecho del Mar, que no es otro que el principio general “la tierra domina al mar”, para tratar de aplicarlo a esta situación conflictiva. Según la profesora Araceli Mangas, Bartolo de Sassoferrato es probablemente el primer autor que señala, en el siglo XIV, que un Estado Ribereño tiene derecho a ejercer la plena soberanía sobre sus aguas adyacentes⁷⁴.

Posteriormente, en los siglos XVI y XVII se confrontan dos tesis doctrinales acerca de los derechos que un Estado ribereño tiene sobre su franja de mar adyacente: por un lado, un sector de la doctrina defiende que los Estados no tienen derecho a ejercer soberanía sobre las aguas adyacentes a su territorio, posición representada por el holandés Hugo Grocio en su obra *Mare Liberum* (1605); por otro lado, el sector doctrinal opuesto, esgrime que los Estados ribereños sí tienen derecho a ejercer soberanía sobre los espacios marítimos contiguos a su costa, teoría que se plasma en la obra del británico Jhon Shelden *Il mare clausum* de 1635⁷⁵. Ante la confrontación doctrinal, las grandes potencias marítimas del siglo XVII, como España y Portugal, acogen la segunda teoría, acorde con sus pretensiones sobre el mar, transformando esta teoría en una práctica que será el

74 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p.35.

75 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 114.

germen del principio “la tierra domina el mar”. Si bien, no se llega a un consenso de delimitación del espacio marino adyacente sobre el que se puede ejercer soberanía⁷⁶.

Ante este problema, el holandés Cornelius Van Bynkershoek propone en 1702 un criterio de delimitación del mar territorial, conocido como la teoría de la bala de cañón, que sostiene que un Estado puede ejercer soberanía en la franja de mar adyacente a su costa sobre la extensión que este es capaz de defender con su artillería. Esta teoría se propone dos años antes de la toma de Gibraltar y posteriormente será aceptada progresivamente por la mayoría de los Estados para delimitar su franja de mar soberana conocida como mar territorial⁷⁷. A través de la práctica soberana de los Estados ribereños, se llega al consenso tácito en el que el alcance de la bala de cañón se corresponde con la distancia de 3 millas náuticas y que, sobrepasadas las mismas, se extiende el espacio marino conocido como alta, mar donde rigen los principios de libertad de navegación y pesca.

Llegados a este punto del análisis jurídico, tenemos que decir que el principio “la tierra domina el mar” se va asentando hasta mediados del siglo XX, donde encontramos sentencias del Tribunal Internacional de Justicia que consolidan este principio, destacando la Sentencia de 18 de diciembre de 1951, conocida como el caso Pesquerías entre Reino Unido y Noruega. En la misma se dictamina lo siguiente:

“La delimitación de espacios marítimos tiene siempre un aspecto internacional, ya que interesa a Estados distintos del Estado ribereño; por tanto, no puede depender solamente de la voluntad de este. A ese respecto, ciertas consideraciones fundamentales, inherentes a la naturaleza del mar territorial, llevan a adoptar los siguientes criterios que pueden orientar a los tribunales: como el mar territorial esta estrechamente ligado al dominio terrestre, la línea de base no puede apartarse de modo apreciable de la dirección general de la costa”⁷⁸.

De este fragmento jurisprudencial podemos deducir que un Estado ribereño ejerce

76 Por ejemplo, el veneciano PABLO SARPI sostiene en 1616 que, siempre que no perjudique a otros, una ciudad tiene derecho a ser propietaria de tanta parte del mar como fuera necesario. Citado en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 114 *in fine*.

77 VERDÚ BAEZA, J., op. cit. pp. 114-115.

78 Es un extracto de los resúmenes de las Sentencias más relevantes del TIJ encontrado en la página oficial, véase el siguiente enlace <https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-es.pdf> (última vez consultado 17/06/2019). Concretamente, el texto está en la página 39.

soberanía sobre el mar territorial, que se mide desde unas líneas de base situadas en la costa. En este sentido, el Profesor Remiro Brotóns afirma que:

“La soberanía sobre la franja del mar adyacente dimana naturalmente de la soberanía sobre dicha costa y ciertamente no se trata de un principio imperativo (cabiendo), por tanto, limitar una cesión territorial al mero espacio terrestre, concebido como costa seca, pero se trata de una excepción que requiere prueba de que esa ha sido voluntad de las partes”⁷⁹.

Dichas las aportaciones jurisprudenciales y doctrinales pertinentes, el principio general “la tierra domina el mar” se consolida de forma definitiva, tras una serie de regulaciones internacionales previas, en el artículo 2.1 de la CNUDM de 1982, que es el instrumento regulador internacional de Derecho del Mar más relevante de la historia. Dicho artículo establece lo siguiente: “la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial”⁸⁰.

Este tratado internacional, prácticamente aceptado por casi toda la comunidad internacional, también regula la anchura del denominado mar territorial en su artículo 3⁸¹:

“Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención”.

Al observar este conjunto normativo, podemos deducir que Reino Unido o Gibraltar pueden extender hasta 12 millas náuticas su soberanía en el mar desde su territorio, salvo en el interior de la Bahía de Algeciras, al tratarse de un supuesto especial, pero también regulado en la citada convención en su artículo 15 de la siguiente forma:

“Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a

79 REMIRO BROTONS, A., “Regreso a Gibraltar. Acuerdos y desacuerdos hispano-británicos”. *Gibraltar, 300 años*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2004, p. 74. Citado en VERDÚ BAEZA, J., op. cit. p. 115 y MANGAS MARTÍN. A., op. cit. p. 37.

80 https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf p. 31, (última vez consultado 17/06/2019).

81 *Ibidem*, p. 31, (última vez consultado 17/09/2019).

frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial mas allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma”⁸².

Este artículo permite a España y Reino Unido/Gibraltar dividir la bahía con una línea media proporcional a los territorios que cada Estado tiene en la misma, salvo que se haya llegado a un acuerdo con un criterio distinto al regulado por la convención. Durante este trabajo hemos sostenido que dicho acuerdo no existe, por lo que la CNUDM sería el medio de delimitación adecuado para dar conclusión al conflicto de las aguas adyacentes a Gibraltar, salvo que otro derecho quiebre esta regulación internacional.

España sostiene que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización que no genera espacios marítimos desde la firma del Tratado de Utrecht al no incluirse ninguna mención a estos espacios en el citado tratado, si bien su práctica no es acorde con su posición, ya que si esto fuera así, el Estado español debería haber regulado que los espacios marinos de la Bahía de Algeciras son suyos por completo y los habría delimitado conforme al artículo 10.4 de la citada convención, que establece lo siguiente:

“Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía no excede de 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar y las aguas que queden así encerradas serán consideradas aguas interiores”⁸³.

El profesor Remiro Brotóns afirma en este sentido que “España...no se atrevió a convertir las aguas de la Bahía en aguas interiores cerrando su boca con una línea de base recta entre Algeciras y Punta Europa cuando sí lo hizo en escotaduras menos pronunciadas de la costa peninsular española⁸⁴”.

82 https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf p. 36, (última vez consultado 17/06/2019).

83 *Ibidem*, p. 33, (última vez consultado 17/06/2019).

84 REMIRO BROTONS, A., op. cit. p. 76.

Siguiendo el Derecho del Mar aplicable expuesto en este apartado, la profesora Araceli Mangas propone una delimitación de las aguas adyacentes a Gibraltar pero excluyendo el territorio del istmo, que queda fuera de la cesión territorial del Tratado de Utrecht:

“In the western side of Gibraltar, the appropriate delimitation in accordance with article 15 of UNCLOS, failing agreement between the two States concerned to the contrary, should be the median/equidistant line between Punta Carnero and Punta Europa in the Bay of Gibraltar until the old pier yielded by article X of the Utrecht Treaty and, in the southern side, the median line between Punta Europa and the Spanish coast in North Africa (Ceuta). The Spanish practice vis-à-vis third States has accepted the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines. In the eastern side, since there is no opposite coast, the United Kingdom might project a 12-mile breadth from Punta Europa to the end of the territory yielded by article X, excluding the eastern waters of the isthmus”⁸⁵.

Esta sería una propuesta de delimitación acorde al Derecho del Mar vigente, la cual ni concuerda con la postura británica ni con la postura española actuales como podemos observar en los apartados anteriores. Es más, España al ratificar la CNUDM en 1997 formula una declaración persistiendo en su argumentación de la teoría de la costa seca haciendo referencia a solo lo convenido en Utrecht⁸⁶. Sin embargo, la CNUDM prevé la imposibilidad de admitir reservas a los derechos regulados en la misma, por lo que tal declaración española carece de efectos jurídicos vinculantes. Concretamente, el artículo 309 de la CNUDM establece que: “no se podrán formular reservas ni excepciones a esta Convención, salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la Convención”⁸⁷.

85 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 37. Una traducción aproximada del texto sería la siguiente: “En la parte occidental de Gibraltar, la apropiada delimitación en concordancia con el artículo 15 de la CNUDM, a falta de acuerdo en sentido contrario entre los dos Estados, debería ser la línea media equidistante entre Punta Carnero y Punta Europa en la Bahía de Gibraltar hasta el antiguo muelle cedido en el artículo X del Tratado de Utrecht y, en la parte sur, la línea media entre Punta Europa y la costa española de Ceuta en el Norte de África. La práctica española frente a terceros Estados ha aceptado la línea media equidistante desde los puntos más cercanos de las líneas de base. En el lado este, como no hay costas encontradas/opuestas, el Reino Unido podría proyectar 12 millas náuticas de extensión desde Punta Europa hasta el final del territorio cedido en el artículo X del Tratado de Utrecht, excluyendo las aguas de la zona este del istmo”.

86 La declaración es la siguiente: “no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713”. BOE de 14 de febrero de 1997.

87 https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf página 167 (última vez consultado (17/06/2019)).

Como hemos visto, los artículos aplicables a la delimitación de las aguas adyacentes a Gibraltar no admiten reserva alguna por parte de los Estados firmantes.

Vistos todos los artículos aplicables de Derecho del Mar al conflicto de las aguas adyacentes a Gibraltar, nos preguntamos si hay más derechos que puedan influir en la solución jurídica que intentamos buscar en este trabajo. La profesora Araceli Mangas, además de cuestionar con su delimitación ajustada a Derecho del Mar, las posiciones jurídicas de ambos Estados implicados en el conflicto, afirma también que este conjunto de derechos regulado en la CNUDM puede ser afectado por el Derecho de Descolonización de la Naciones Unidas, también conocido como derecho de autodeterminación de los pueblos, debido a que, como hemos señalado anteriormente, Gibraltar es considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonización y tal estatus puede afectar al establecimiento de un régimen concreto de las aguas adyacentes del citado territorio por lo que es necesario, para llegar a unas conclusiones finales, analizar este derecho que afecta a la controversia tratada⁸⁸.

88 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 37.

9. EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DEL MAR: ¿AFECTA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS GIBALTAREÑAS?

Una vez hemos analizado el Derecho del Mar aplicable a la controversia gibraltareña, debemos hacer un esfuerzo más por buscar una solución jurídica en el marco del Derecho Internacional vigente. Este último cuerpo jurídico que vamos a tratar es el denominado derecho de autodeterminación de los pueblos, el cual puede afectar al régimen jurídico de las aguas adyacentes a Gibraltar.

En primer lugar, debemos hallar el punto de partida de este derecho que surge en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco jurídico auspiciado por las Naciones Unidas. Concretamente, en la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 73, se regula lo siguiente:

“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios”⁸⁹.

¿Por qué afecta esta regulación de Naciones Unidas concretamente a Gibraltar si cuando se cedió el territorio en 1713 este se incluyó bajo los dominios del Reino Unido? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la Resolución 66 (I) de la ONU en 1946, que declaró que Gibraltar era un territorio no autónomo⁹⁰, como adelantamos en el apartado 4 de este trabajo.

Este hecho afecta plenamente al estatuto jurídico de Gibraltar porque, tras su inclusión en la lista de territorios no autónomos, el pueblo que allí habita puede ejercer el derecho a la autodeterminación, que es regulado en la Resolución 1514 (XV) de la ONU de 1960⁹¹. En

⁸⁹ <https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html> Podemos encontrar el texto íntegro del artículo 73 y del capítulo XI de la CNU titulado “Declaración relativa a los territorios no autónomos” en este enlace (última vez consultado 17/06/2019).

⁹⁰ <https://undocs.org/es/A/RES/66%28I%29> (última vez consultado 17/06/2019).

⁹¹ <https://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml> (última vez consultado 17/06/2019).

los siete puntos que la misma establece, vamos a destacar dos que serán controvertidos a la hora de descolonizar el territorio teniendo consecuencias directas sobre el régimen de las aguas adyacentes al mismo. Los puntos 5 y 6 declaran que:

“En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo, ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.

Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta proclamación tiene como consecuencia que actualmente existan tres sujetos implicados en la controversia de la descolonización de Gibraltar: el pueblo gibraltareño, Reino Unido, como potencia administradora y, además, España como potencia reclamante debido a que el territorio gibraltareño le pertenecía antes de la toma de Gibraltar en 1704 y el Tratado de Utrecht contiene una cláusula de retrocesión del territorio como apuntamos en el análisis del mismo. Además, el derecho de autodeterminación de los pueblos es calificado como un Derecho imperativo o *Ius Cogens*, es decir, una norma inderogable y que deben acatar todos los Estados⁹².

En este sentido, un pueblo o país con estatus colonial, en este caso el pueblo de Gibraltar, tiene derecho a optar a la libre determinación política sin subyugación o dominación extranjera. Tras la aprobación de la llamada Carta Magna de la Descolonización en 1960, la ONU dicta otra Resolución en 1961, la 1541 (XV), dirigida al apoyo del derecho de autodeterminación de los pueblos, estableciendo las tres posibilidades que tiene un territorio no autónomo de alcanzar el autogobierno: puede ser un Estado independiente y soberano, establecer una libre asociación con un Estado independiente o integrarse en un Estado independiente⁹³. Es importante que señalemos esta cuestión, ya que si Gibraltar ejerce su derecho de autodeterminación, el régimen de

92 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 19.

93 https://www.un.org/es/decolonization/questions_answers.shtml (última vez consultado 17/06/2019). Para ver la resolución detalladamente: [https://undocs.org/es/A/RES/1541\(XV\)](https://undocs.org/es/A/RES/1541(XV)) (última vez consultado 17/06/2019).

sus aguas adyacentes dependería de su elección a la hora de producirse la descolonización.

Para producirse la descolonización del territorio de Gibraltar, debe alcanzarse un acuerdo entre Reino Unido y España en concordancia con lo establecido con la Resolución 2070 (XX) de 1965, la cual invita a ambos Estados a negociar⁹⁴, teniendo en cuenta los intereses de la población del Peñón. Ante este hecho, Reino Unido celebra un referéndum en 1967 en el que pide al pueblo gibraltareño que exprese su deseo de autodeterminación, obteniendo como resultado querer permanecer bajo la soberanía del Reino Unido⁹⁵. La reacción de Naciones Unidas fue dictar otra resolución ese mismo año, la 2353 (XXII), en la que declara que el referéndum contraviene disposiciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y recuerda el punto 6 de la Resolución 1514 (XV) en el sentido de que un proceso de autodeterminación no puede destruir parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país⁹⁶. Sin duda, esta resolución deja un escenario conflictivo y de difícil entendimiento, pues si aun habiendo expresado el pueblo de Gibraltar su deseo de continuar siendo parte integrante de Reino Unido no alcanzó la autodeterminación, no sabemos con certeza como puede terminar este conflicto.

Hay voces contrarias a admitir que los habitantes actuales de Gibraltar sea un pueblo con derecho a la autodeterminación porque los antiguos moradores de la Roca abandonaron el territorio gibraltareño cuando este fue conquistado por Reino Unido y posteriormente cedido en Utrecht en 1713. Fernández Sánchez explica que “en Gibraltar no existe un pueblo con unas características políticas, sociales, culturales, religiosas y étnicas propias, sino que se trata de una población importada tras la expulsión de los antiguos moradores”⁹⁷. Ante esta tesis, debemos señalar que el hecho de que los antiguos habitantes de Gibraltar eran españoles no contraviene que, desde 1713, Gibraltar está habitado por un pueblo distinto que ya lleva viviendo en ese territorio más de 300 años y que tienen su propia idiosincrasia.

94 <https://undocs.org/es/A/RES/2070%28XX%29> (última vez consultado 17/06/2019).

95 <https://www.lavanguardia.com/internacional/20170623/423609924889/referendum-gibraltar-1967.html> (última vez consultado 17/06/2019).

96 <https://undocs.org/es/A/RES/2353%28XXII%29> (última vez consultado 17/06/2019).

97 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 18.

A pesar de ello, el conflicto de la descolonización de Gibraltar sigue sin resolverse, hasta tal punto que, en relación con el Brexit, la Unión Europea afirma que este territorio es una colonia bajo la administración de Reino Unido⁹⁸.

¿Por qué afecta el hecho de que Gibraltar sea considerado territorio no autónomo pendiente de descolonización al régimen de sus aguas adyacentes? Junto con el Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se aprueba la Resolución III que establece lo siguiente en relación con el Derecho del Mar aplicable a un territorio no autónomo:

“a) En el caso de un territorio cuyo pueblo no haya alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonomía reconocido por las Naciones Unidas, o de un territorio bajo dominación colonial, las disposiciones concernientes a derechos e intereses con arreglo a la Convención se aplicarán en beneficio del pueblo del territorio con miras a promover su bienestar y desarrollo;

b) En el caso de una controversia entre Estados relativa a la soberanía sobre un territorio al que sea aplicable la presente resolución y respecto de la cual las Naciones Unidas hayan recomendado determinados medios de solución, las partes en esa controversia celebrarán consultas acerca del ejercicio de los derechos a que hace referencia el apartado a). En esas consultas, los intereses del pueblo del territorio de que se trate constituirán una consideración fundamental. Esos derechos se ejercerán teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y sin perjuicio de la posición de ninguna de las partes en la controversia. Los Estados interesados harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico y no pondrán en peligro ni dificultarán el logro de una solución definitiva de la controversia”⁹⁹.

¿Qué quiere decir todo ello en resumen? En palabras de la profesora Araceli Mangas, “no es posible reconocer competencias de delimitación de espacios marinos a Reino Unido debido al estatus colonial de Gibraltar”¹⁰⁰. En este caso, lo único que se puede hacer es establecer acuerdos de *modus vivendi* para administrar adecuadamente los problemas

98 https://www.abc.es/internacional/abci-union-europea-senala-gibraltar-como-colonia-britanica-propuesta-sobre-visados-201902011415_noticia.html (última vez consultado 17/06/2019).

99 <https://www.dipublico.org/10591/acta-final-de-la-tercera-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-derecho-del-mar/> (última vez consultado 17/06/2019).

100 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. pp. 41-42.

que suscite el escenario conflictivo¹⁰¹. Si bien, la misma profesora también indica que esta resolución no es jurídicamente vinculante para las partes y sirve como recomendación, aunque podría servir a un tribunal competente para interpretar y resolver el conflicto, por lo que debe ser tenida en cuenta por las partes¹⁰². El problema está en que dicha resolución aboga por la descolonización para que la CVNUDM sea aplicable plenamente al régimen de las aguas adyacentes a Gibraltar y como este territorio es considerado no autónomo, podría ser un obstáculo tanto para la delimitación de las aguas como para establecer quién es soberano de dichas aguas. Por todo ello, las negociaciones que deben producirse entre España y Reino Unido de conformidad con todas las resoluciones dictadas por la ONU en materia de descolonización deben llegar a una solución, negociaciones que todavía no han concluido tras 50 años de fracaso.

Para concluir, debemos indicar que hemos intentado abarcar cualquier derecho aplicable al régimen de las aguas adyacentes a Gibraltar y analizado las posiciones políticas de los Estados protagonistas del conflicto, por lo que ya estamos en posición de extraer una serie de conclusiones de todo el análisis jurídico-histórico-político del conflicto para dar por finalizado este proyecto.

101 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit. p. 20.

102 MANGAS MARTÍN, A., op. cit. p. 42.

10. CONCLUSIONES FINALES

Tras un análisis detallado del conflicto de las aguas adyacentes a Gibraltar en lo que respecta a su derecho aplicable y las posiciones interpretativas y fácticas que han tomado los Estados involucrados en el conflicto, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el Tratado de Utrecht cede los elementos territoriales descritos en el mismo, quedando Gibraltar bajo soberanía del Reino Unido, excluyendo el istmo y, por tanto, sus aguas adyacentes de la cesión.

En lo que respecta a si las aguas adyacentes de Gibraltar son o no británicas, debemos decir que el actual derecho de autodeterminación siembra dudas sobre su titularidad, pero no hay duda de que Reino Unido ha ejercido el control efectivo de las mismas desde la cesión del territorio y que el principio “la tierra domina al mar” juega en favor tanto de Gibraltar como del Estado británico para ser los administradores de estas aguas.

En lo relativo a la posición española, que esgrime la teoría de la costa seca, debemos decir que tal principio puede existir mediando acuerdo expreso entre los Estados interesados en el conflicto, pero no existe tal acuerdo y tampoco se puede interpretar el Tratado de Utrecht unilateralmente por España en ese sentido porque este principio excepcional de delimitación de aguas requiere reconocimiento por todas las partes implicadas y Reino Unido niega esta posición.

En cuanto a la hipotética delimitación de las aguas gibraltareñas, la posición que ofrece la Profesora Araceli Mangas al delimitar los espacios marinos adyacentes sería la más acorde en virtud del Derecho del Mar aplicable: en primer lugar, conforme al artículo 15 de la CNUDM, en el interior de la Bahía, partiendo de los elementos territoriales cedidos en Utrecht, no desde los terrenos ganados al mar o desde el istmo ocupado tras la cesión, quedaría la bahía repartida proporcionalmente entre los Estados implicados en el conflicto; en segundo lugar y conforme al mismo artículo, en la zona sur, las aguas se dividirían con las adyacentes a la costa española de Ceuta en África y, en tercer lugar, conforme al artículo 3 en la cara este del Peñón, Reino Unido o Gibraltar podrán establecer su soberanía hasta 12 millas náuticas.

Si bien, esta delimitación y lo que es más importante, la atribución del régimen de las aguas de Gibraltar, se podrá realizar cuando se alcance la definitiva descolonización del territorio en virtud de la Resolución 1514 (XV) y de las otras resoluciones citadas en este trabajo pudiendo obtener diferentes resultados: si Gibraltar se independiza, las aguas serían puramente gibraltareñas; si se convierte en un Estado libre asociado de Reino Unido, o decide ser parte del Reino Unido, las aguas pertenecerían a uno de estos dos titulares conforme a lo que acuerden y, si Gibraltar se reintegrara como territorio español, las aguas podrían volver a ser españolas.

En conclusión, todo pasa por un acuerdo entre Reino Unido como potencia administradora y España como reclamante, conforme a los intereses de la población de Gibraltar; por lo que, actualmente, Reino Unido es administrador de las aguas adyacentes al Peñón y se pueden establecer acuerdos provisionales sobre las mismas hasta que se produzca la descolonización del territorio y pueblo de Gibraltar.

11. BIBLIOGRAFÍA

11.1.- Artículos de revistas y libros:

- AZCÁRRAGA BUSTAMANTE, J.L. DE, “Las aguas españolas de Gibraltar (la Bahía de Algeciras a la luz del Derecho Internacional)”, *Estudios de Derecho Internacional público y privado. Homenaje al Profesor Luis Sela Stampil*, Vol. 2, 1970.
- CANTILLO, A. DEL, *Tratados, Convenios y Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día, puestos en orden e ilustrados muchos de ellos con la historia de sus respectivas negociaciones*, Imprenta de Alegría y Charlain, Madrid, 1843.
- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “La controversia sobre la titularidad jurídico-internacional de los espacios marítimos adyacentes a Gibraltar”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 6 nº 2, 2015.
- HILLS, G., *El Peñón de la discordia. Historia de Gibraltar*, Editorial San Martín, Madrid, 1974.
- IZQUIERDO SANS, C., *Gibraltar en la unión Europea. Consecuencias sobre el contencioso hispánico-británico y el proceso de construcción europea*, Tecnos, Madrid, 1996.
- LEVIE, H.S., *The Status of Gibraltar*, Colorado, Boulder, 1983.
- MANGAS MARTÍN, A., “Gibraltar: adjacent waters to the territory yielded by Spain”, *New Approaches to the Law of the Sea*, 2017.
- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, *La cuestión de Gibraltar*, Madrid, 2008.
- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, *Libro Rojo sobre Gibraltar*, Madrid, 1966.
- REMIRO BROTONS, A., “Regreso a Gibraltar. Acuerdos y desacuerdos hispano-británicos”. *Gibraltar, 300 años*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2004.
- UXÓ PALASI, J., “Gibraltar. La soberanía sobre sus aguas”, *Revista Veintiuno*, nº 44, 1999-2000

- VALLE GÁLVEZ, A. DEL y GONZÁLEZ GARCÍA, I., “La Bahía de Algeciras y las aguas españolas”, *Gibraltar, 300 años*, 2004.
- VALLE GÁLVEZ, A. DEL, “España y la Cuestión de Gibraltar a los 300 años del Tratado de Utrecht”, *ARI, Real Instituto Elcano*, nº 23, 2013 a.
- VALLE GÁLVEZ, A. DEL, “¿De verdad cedimos el Peñón? Opciones estratégicas de España sobre Gibraltar a los 300 del Tratado de Utrecht”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LXV(2), 2013 b.
- VERDÚ BAEZA, J., “La Controversia sobre las aguas de Gibraltar: el mito de la costa seca”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 66, Nº 1, 2014.

11.2.- Recursos obtenidos en Internet:

- Carta de la ONU: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf
- Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar:
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
- Instrumento de adhesión de 2 de mayo de 1972, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969:
<https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11884>
- Instrumento de ratificación de la CNUDM realizado por España que incluye íntegramente el articulado del tratado: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-3296> BOE número 39, de 14 de febrero de 1997.
- Lista de territorios pendientes de descolonización:
<http://www.un.org/es/decolonization/nonselgovterritories.shtml>
- Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU:
<http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml>
- Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la ONU:
[https://undocs.org/es/A/RES/1541\(XV\)](https://undocs.org/es/A/RES/1541(XV))

- Resolución 2070 (XX) de la Asamblea General de la ONU:
<https://undocs.org/es/A/RES/2070%28XX%29>
- Resolución 2353 (XXII) de la Asamblea General de la ONU:
<https://undocs.org/es/A/RES/2353%28XXII%29>
- Resolución III anexa al Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar: <https://www.dipublico.org/10591/acta-final-de-la-tercera-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-derecho-del-mar/>
- Resolución 66 (I) de la Asamblea General de la ONU: [http://www.undocs.org/A/RES/66\(I\)](http://www.undocs.org/A/RES/66(I))
- Sentencia de 18 de diciembre de 1951, conocida como el caso Pesquerías entre Reino Unido y Noruega: <https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-es.pdf>
- Texto íntegro del artículo 73 y del capítulo XI de la CNU titulado “Declaración relativa a los territorios no autónomos”: <https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-xi/index.html>
- Tratado de Utrecht:
<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Documentos.aspx>

11.3.- Artículos periodísticos:

- https://elpais.com/diario/1982/12/15/portada/408754801_850215.html
- <https://www.lavanguardia.com/internacional/20170623/423609924889/referendum-gibraltar-1967.html>
- https://www.abc.es/internacional/abci-union-europea-senala-gibraltar-como-colonia-britanica-propuesta-sobre-visados-201902011415_noticia.html